

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, FRENTE AL CAMBIO JURISPRUDENCIAL EN MATERIA
PENSIONAL



Presentado por:

PIEDAD CRISTINA GALLEGU VELÁSQUEZ
DIANA MARCELA ROMERO ALCÁNTAR

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL
CÚCUTA, COLOMBIA
2018

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, FRENTE AL CAMBIO JURISPRUDENCIAL EN MATERIA
PENSIONAL

Presentado por:

PIEDAD CRISTINA GALLEGU VELÁSQUEZ
DIANA MARCELA ROMERO ALCÁNTAR

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de
Especialista en Derecho Constitucional.

Asesor disciplinar

Dr. DAVID LIZANDRO JÁCOME SÁNCHEZ

Asesor metodológico

Dr. LUIS ANTONIO MUÑOZ HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL
CÚCUTA, COLOMBIA

2018

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, FRENTE AL CAMBIO JURISPRUDENCIAL EN MATERIA PENSIONAL

Piedad Cristina Gallego Velásquez¹
Diana Marcela Romero Alcántar²

RESUMEN

El análisis sobre la eficacia de los medios legales existentes para la protección del derecho al mínimo vital a los servidores públicos, frente a la variante posición jurisprudencial en materia pensional, para establecer si es necesario implementar una nueva figura jurídica que responda a esta necesidad, presenta una identificación de los medios legales existentes para la protección del derecho al mínimo vital de los servidores públicos, con posterioridad a un cambio jurisprudencial; asimismo, en este estudio se determina la eficacia de los medios legales existentes para la protección del derecho al mínimo vital de los servidores públicos, que se exponen a esta situación; y finalmente, se establece la necesidad de implementar una nueva figura jurídica para garantizar el derecho al mínimo vital en estos casos.

Palabras claves:

Mínimo vital, servidores públicos, seguridad social, línea jurisprudencial, seguridad jurídica.

¹ Abogado. Especialización en Derecho Constitucional – Universidad Libre Seccional Cúcuta. Email: picrisgavel@hotmail.com

² Abogado. Especialización en Derecho Constitucional – Universidad Libre Seccional Cúcuta. Email: dmromero53@gmail.com

ABSTRACT

The analysis of the effectiveness of the existing legal means for the protection of the right to a vital minimum for public servants, in contrast to the jurisprudential position on pension matters, to establish whether it is necessary to implement a new legal figure that meets this need, presents an identification of the existing legal means for the protection of the right to the vital minimum of public servants, after a jurisprudential change; likewise, this study determines the effectiveness of existing legal means for the protection of the right to the vital minimum of public servants, who are exposed to this situation; and finally, it establishes the need to implement a new juridical figure to guarantee the right to the vital minimum in these cases.

Keywords:

Minimum vital, public servants, social security, jurisprudential line, legal security.

INTRODUCCIÓN

El derecho es una variedad de normas que por generalidad no guardan relación congruente entre norma y norma, lo que dificulta integrar dentro del ordenamiento seguridad jurídica que permita establecer resultados similares ante factores fácticos idénticos. Es decir, el conglomerado de normas que se originan en razón al sistema de derecho continental dificulta concretar en determinadas áreas jurídicas aspectos ciertos en derecho. Esto hace que las decisiones judiciales varíen conforme a la versatilidad del ordenamiento y la interpretación jurídica del sujeto.

Lo anterior ha generado, que en la actualidad la eficacia de mecanismos constitucionales y legales que se diseñaron para proteger y promover los derechos de las personas queda en duda ante la falta de justicia material. En consecuencia, el presente artículo tiene como propósito analizar la eficacia de los medios legales existentes para la protección del derecho al mínimo vital a los servidores públicos, frente a la variante posición jurisprudencial en materia pensional, y establecer si es necesario implementar una nueva figura jurídica que responda a esta necesidad.

La investigación desarrollada es jurídica, de carácter documental, y de tipo analítico – descriptivo, para ello se acudió a diferentes normas, estudios, y jurisprudencia de las Altas Cortes, que fueron sometidas a un proceso de análisis con apoyo de la hermenéutica jurídica.

El estudio se divide en tres partes a través de las cuales se da respuesta a los objetivos específicos planteados, así en la primera se identifican los medios legales existentes para la protección del derecho al mínimo vital de los servidores públicos, con posterioridad a un cambio jurisprudencial; en un segundo momento, se determina la eficacia de los medios legales existentes para la protección del derecho al mínimo vital de los servidores públicos, que se exponen a esta situación; y para finalizar en la

tercera parte, se establece la necesidad de implementar una nueva figura jurídica para garantizar el derecho al mínimo vital en estos casos.

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, FRENTE AL CAMBIO JURISPRUDENCIAL EN MATERIA PENSIONAL

En Colombia, el acceso a la pensión especial de vejez, es un derecho de índole constitucional, toda vez que emana de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital. De igual manera la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado “el carácter de derecho fundamental que tiene la seguridad social dentro del ordenamiento jurídico colombiano y su íntima conexidad con los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, y trabajo” (Sentencia T-658 de 2008).

Refiriéndose al derecho a la pensión como un derecho fundamental por conexidad, Vásquez Fruto & Muñoz Osorio (2010), señalan que:

El derecho a la pensión aparece como un derecho fundamental por conexidad. Son derechos fundamentales por conexidad, aquellos que, si bien no hacen parte del capítulo de los derechos fundamentales, adquieren esta condición, cuando su vulneración afecta la vida o la posibilidad de subsistencia, de igual manera, el derecho al reconocimiento de la pensión en conexidad con el mínimo vital, ya que este garantiza según la perspectiva de la Corte Constitucional los derechos a la vida, la salud el trabajo y la asistencia o seguridad social. Sentencia T-297 de 1998 y T-140 de 1999. Esto implica una visión amplia de los derechos fundamentales en que se tiene en cuenta los derechos sociales, acorde con los valores, principios y normas constitucionales. (pp. 53-54).

En relación al ámbito de los servidores públicos, cabe resaltar que, incluso en la actualidad, en Colombia existen diversos regímenes en materia pensional, de tal suerte que al momento de solicitar el reconocimiento o reliquidación del derecho pensional se presentan conflictos entre la administración y los solicitantes, principalmente en relación con la norma aplicable, el monto de la pensión o los factores que deben

tenerse en cuenta para la liquidación de la prestación social, razón por la cual resulta inevitable que acudan ante el juez contencioso administrativo para dirimir el conflicto jurídico.

Es así como sobre el particular tema de las pensiones de los servidores públicos, se han proferido fallos judiciales que deniegan el derecho pensional solicitado, bajo ciertas precisiones normativas, jurisprudenciales y criterios de interpretación vigentes al momento de la decisión.

No obstante, a través de los años, el Consejo de Estado ha variado la posición jurisprudencial respecto de las normas que son aplicables a los servidores públicos y los factores a tener en cuenta para la liquidación del derecho pensional, conllevando a que los fundamentos por los cuales fue negado el derecho, sean modificados, evidenciándose una afectación en el derecho fundamental al mínimo vital para quien haya culminado su proceso, previo al cambio jurisprudencial que ahora es favorable.

A manera de ejemplo, en cuanto a los factores salariales válidos para liquidar la pensión, primero el Consejo de Estado sostuvo que “el listado de factores contemplado en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, era taxativo”³. Después, afirmó que “dicho listado era enunciativo y, en consecuencia, las pensiones se debían liquidar con todos los factores salariales devengados por el trabajador”⁴. (Franco, 2012).

Como consecuencia de este cambio jurisprudencial, “las pensiones de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, a diferencia de los demás pensionados, se liquidan con todos los factores salariales devengados, sin importar si se hicieron o no aportes para pensión sobre estos”. (Franco, 2012). Las citadas son sentencias hito, pero la línea durante los últimos años ha mantenido la tendencia.

³ C. E., Secc. Segunda, Subsección A, Sent. 150012331000 200203625 01 (1593-08), abr. 8/10.

⁴ C. E., Secc. Segunda, Subsección A, Sent. 250002325000200607509 01 (0112-2009), ago. 4/10.

Es por esta razón que se hace necesario precisar cuáles son las vías legales establecidas para proteger el derecho al mínimo vital de los servidores públicos, frente a la caótica jurisprudencia en materia pensional, y si estas vías son eficaces o si resulta necesaria la creación o implementación de una figura jurídica distinta que garantice dicho derecho de manera ágil y oportuna, tomando en cuenta su relevancia constitucional, a fin que no resulte menoscabado.

Medios legales existentes para la protección del derecho al mínimo vital de los servidores públicos, con posterioridad a un cambio jurisprudencial

En Colombia, el Estado de derecho implica que el sistema de normas sea coherente en sus distintas vertientes jerárquicas de producción, es decir, que exista seguridad o certeza sobre el tratamiento normativo de determinados temas. Sin embargo, ningún ordenamiento jurídico es completo, menos en aquellos que se rigen por el derecho continental. Para suplir tales vacíos, la jurisprudencia, especialmente la construida por la Corte Constitucional se ha encargado de complementar a través de sub reglas las lagunas interpretativas o normadas que ha dejado el legislativo, todo lo anterior a la luz de la Constitución Política.

Pero al igual que con el marco normativo, las líneas jurisprudenciales tienden a ser cambiadas con frecuencia, hecho que no es ajeno en los aspectos del derecho laboral, principalmente en lo referente al ajuste pensional. Dicha maleabilidad del derecho afecta la seguridad jurídica y la confianza legítima en las instituciones judiciales, porque no permite tener certeza sobre las cuestiones fácticas y jurídicas.

Para fundamentar lo anterior, se puede observar la sentencia C-258 del 2013, que creo la sub regla que a partir del 1 de julio del año 2013, ninguna mesada pensional podría superar los 25 salarios. Lo anterior bajo el argumento que “existe falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea financiada con recursos públicos

mediante un subsidio muy elevado” (Sentencia C-258, 2013). Con este fallo, la Corte Constitucional reformó la sub regla que permitía tener mesadas pensionales superiores a 25 salarios, pero también, la sub regla que garantizaba posibles expectativas sobre derechos adquiridos.

En esa misma línea está la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 45050 del 15 de junio de 2016, donde esta Corporación corrigió su postura negativa sobre la prescripción de los derechos a la seguridad social, habilitando a sus titulares a requerir en cualquier momento la obligación de sus derechos:

Por esto, la seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habilita a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado social de Derecho. (Sentencia de Casación 45050, 2016)

Es importante recordar, que la jurisprudencia anterior a este fallo, y consolidada desde 2003⁵, tenía por mayoría establecido el criterio de que si bien el derecho a la pensión como tal es imprescriptible, la acción judicial por la no inclusión de factores salariales, o por considerarlos deficitariamente en el cálculo de las pensiones, prescribe transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha del reconocimiento

En ese orden de ideas, se infiere que en el ámbito laboral la jurisprudencia es cambiante, en algunos casos para desfavorecer derechos adquiridos, en otros, para extender las gamas de garantías a favor de la persona. En consecuencia, la eficacia de los mecanismos constitucionales y legales queda en duda, porque la jurisprudencia no tiene la capacidad para responder de manera congruente y similar, lo que resulta una afectación para las personas.

⁵ Sentencia CSJ SL, 15 jul 2003, rad. 19557.

Como en gran parte de las decisiones litigiosas laborales se afecta el mínimo vital de la persona, es relevante conocer cuáles son los medios constitucionales y legales para la protección de su derecho después de un cambio jurisprudencial.

Quizás, la tutela en Colombia se convirtió en un mecanismo que acercó a las personas con sus derechos fundamentales y constitucionales como cualquier otra acción. Respecto al mínimo vital, la tutela es una acción admisible desde la órbita judicial, pero, sin perjuicio de establecer ciertos límites a través de sub reglas que eviten su uso discriminado.

Para Rodolfo Arango (2003) “(...) la justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales aún es posible. (...) la noción de mínimo vital liga, de manera todavía vigorosa, la idea de subsistencia (por debilidades de salud o de dinero) con la noción de fundamentalidad tutelable”. Así, en los casos de pensiones, las mayores sentencias se centran en la falta de pago o la demora en la asignación, la regla general para la Corte Constitucional es que la sentencia de tutela es una acción procedente y fidedigna para reclamar el derecho.

No obstante, para que la acción de tutela sea un mecanismo eficaz es necesario la existencia de una debilidad manifiesta, que en conexo con el derecho a la vida o la salud, vulnere el mínimo vital. Así mismo, no debe existir otro ingreso que demuestre que el mínimo vital se encuentra sustentado por medio de este. La afectación al mínimo vital se presume cuando se traten de personas mayores de edad o incapacitados, aspecto que se cumple en la mayoría de casos pensionales. Dicha presunción solo se desvirtúa a través de prueba practicada por la parte demandada.

Así las cosas, las sub reglas para que proceda la acción de tutela en razón a la afectación del mínimo vital son:

1. Procede la tutela cuando el demandante es de la tercera edad, ya que, se presume la vulneración

2. No es procedente la acción de tutela cuando la persona no es de la tercera edad a menos que se viole su mínimo vital
3. Procede la acción de tutela cuando la persona no es de la tercera edad si no tiene otros medios de subsistencia o que la situación de vulnerabilidad por falta de pago ponga en peligro el mínimo vital

Por consiguiente, la acción de tutela es un mecanismo constitucional idóneo para la protección del mínimo vital en cuanto a afectaciones al derecho a la seguridad social. Por tal motivo, se erige como el principal instrumento jurídico para la consecución de la materialización de los derechos económicos y sociales. Premisa que guarda mayor fundamento ante las decisiones de la Corte Constitucional que aseguran, sin perjuicio de limitaciones, la protección del mínimo vital para pensionados a través de la acción de tutela.

La fuerza del precedente judicial en Colombia se originó a partir de la entrada en funciones de la Corte Constitucional, en sus fallos logró posicionar al sistema judicial sobre otras ramas del poder público, lo que conllevó a desdibujar el derecho continental que se imponía en el país. Por eso, con la entrada en vigor de la Ley 1437 del 2011, el precedente judicial uniforme en Colombia es obligatorio para las autoridades administrativas.

Al respecto sostiene el artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. (Ley 1437, 2011).

Contreras Álvarez, D & Álvarez Márquez, S (et. Al) (2016) dicen sobre lo anterior que:

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempló novedosas figuras jurídicas como lo es Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades, fortaleció figuras existentes como el Derecho de petición, e impuso en sede judicial cargas procesales a las entidades pública con sanciones por su incumplimiento, que permiten efectivizar los derechos de los ciudadanos que acuden a las entidades públicas o se ven afectados por éstas. (P. 10)

De acuerdo a lo anterior, el mecanismo de extensión jurisprudencial es una acción legal pertinente para proteger los derechos a la seguridad social en el panorama administrativo de los fondos de pensiones. Del mismo modo, asegura que se otorgue un tratamiento similar a los derechos sociales ante el respeto del precedente judicial, evitando interpretaciones administrativas ajenas al deseo judicial. La extensión jurisprudencial también es una acción que permite salvaguardar la coherencia de las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, evitando variaciones que perjudiquen al titular del derecho.

Por tanto, ante las variaciones judiciales, la extensión jurisprudencial es un mecanismo que permite fortalecer la jurisprudencia sobre derechos sociales y económicos ante los fondos de pensiones. Fortaleciendo de tal manera una línea jurisprudencial frente a cualquier fallo posterior que trate de modificar las sub reglas planteadas. Así, ante la variación de una línea jurisprudencial ante un fallo posterior lo más fidedigno es activar la extensión jurisprudencial para mantener la prevalencia de los precedentes, conforme a las reglas que señala el artículo 102 del CPCA.

En esa misma línea, el artículo 256 de la Ley 1437 del 2011, que contempla el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia se erige como una acción legal pertinente para salvaguardar los derechos sociales de las personas en materia laboral.

Para los servidores públicos, se destina como un mecanismo que asegura la “ (...) unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales” (Ley 1437, 2011).

Así las cosas, el recurso extraordinario en mención permite a los servidores públicos acudir a una máxima instancia, cuando se varié una línea jurisprudencial respecto a derechos sociales que le afecté, mediante esta acción legal, podrá obtener una vía judicial alterna que aclare precisiones jurídicas de sus derechos.

Eficacia de los medios legales existentes para la protección del derecho al mínimo vital de los servidores públicos, que se exponen a esta situación

Un marco formal garantista necesita de acciones jurídicas reales que puedan afectar en el ámbito material, de tal manera, que derechos como el mínimo vital sean protegidos ante las acciones u omisiones que vulneren los derechos fundamentales. En ese sentido, no es suficiente que dentro del ordenamiento jurídico se establezcan normas y acciones a favor de las personas, también es necesario que dichas estipulaciones tengan eficiencia suficiente para respetar la Constitución y la Ley.

De acuerdo con el capítulo anterior, distintas son las acciones constitucionales y legales que se dispusieron a favor de las personas para conseguir la materialización de sus derechos sociales. Sin embargo, ante la dinámica jurisprudencial, la eficacia de las acciones puede verse contrarrestada por las nuevas sub reglas que en plano judicial imponen corporaciones como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Para ello, basta evidenciar las distintas líneas jurisprudenciales sobre un mismo tema en derecho laboral.

Por tanto, el presente capítulo tiene como objetivo conocer la eficacia de los mecanismos estudiados anteriormente, para así poder reconocer si los mismos son suficientes y completos para proteger el mínimo vital de los servidores públicos. Para ello, se hará un estudio desde un concepto teleológico, donde la finalidad de cada acción permitirá comprender su eficiencia dentro de la realidad jurídica.

Así las cosas, como lo sostiene Bastida Freijedo, F; Villaverde Menéndez, I & Requejo Rodríguez, P (s.f.) (et.Al):

La eficacia de los derechos fundamentales, como la de cualquier otra norma constitucional, sólo puede ser medida en términos jurídicos a partir de la aptitud de su contenido normativo para la consecución de su objeto, la garantía de un determinado ámbito de libertad personal. (p.179)

La acción de tutela, es un mecanismo constitucional, que para la protección del derecho al mínimo vital ha sido eficaz para garantizar los derechos sociales y económicos de las personas, a pesar que en primera instancia, los mismos no son fundamentales. El denominado “amparo” en otros países, ha sido un instrumento que se flexibilizó mediante la jurisprudencia, siendo accesible para derechos que no están dentro del Título II, Capítulo I de la Constitución Política.

Para la Corte Constitucional:

El derecho a la seguridad social es fundamental en el caso de las personas que presenten alguna circunstancia de debilidad manifiesta, en razón de su conexidad con el derecho fundamental al mínimo vital y, por tanto, su vulneración puede ser conocida a través de la acción de tutela. (Sentencia T-005, 1995).

La acción de tutela es eficaz para la protección del mínimo vital aun cuando no existe disponibilidad fiscal para asegurar el pago, la falta de presupuesto no exime del pago, y las entidades accionadas tienen el deber de realizar los pagos adeudados. Así

las cosas, la acción de tutela le otorga supremacía al mínimo vital respecto a la insolvencia económica de las empresas, prevaleciendo ante cualquier caso, el debido pago a los acreedores.

A propósito del reconocimiento de la pensión por medio de la acción de tutela, la Corte Constitucional acepta su procedencia a pesar de no ser considerada una regla general, cuando se vulnera el mínimo vital “En principio, el reconocimiento de la pensión no procede por tutela, salvo si hay una afectación del mínimo vital” (Sentencia T-143, 1998).

Por lo tanto, la acción de tutela sí resulta ser un mecanismo eficaz para los servidores públicos que busquen garantizar su mínimo vital, principalmente, por el rápido término para ser decretada y por el trasfondo de las decisiones, que terminan protegiendo derechos fundamentales, ordenes que son difícil de soslayar para las entidades administrativas.

Por otra parte, el mecanismo legal de extensión jurisprudencial tiene como finalidad hacer prevalecer el precedente y descongestionar el aparato judicial, resolviendo de manera expedita las controversias que se originen en sede administrativa.

La Ley 1437 del 2011 fortaleció así el derecho de petición y eliminó la discrecionalidad administrativa, siendo obligación de las entidades actuar conforme lo dictan las líneas jurisprudenciales. Por eso, aunque es un instrumento novedoso, tiene la fuerza legal suficiente para imponer el respeto del precedente judicial sin necesidad de acudir a los jueces. Por consiguiente, la extensión jurisprudencial es una acción legal oportuna para salvaguarda el mínimo vital de los servidores públicos porque el precedente es lo suficientemente coherente sobre este derecho, siendo accesible su protección a través de esta acción.

En materia de seguridad social, la extensión jurisprudencial es útil para un número importante de personas teniendo en cuenta las cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (2014), que posiciona a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional como las entidades más accionadas a través de dicho mecanismo. Por ende, la utilización de la extensión jurisprudencial para reclamar derechos sociales y económicos es eficaz teniendo en cuenta su masiva expresión después de la promulgación de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial es quizás la acción legal más idónea para salvaguardar el mínimo vital ante los cambios de las líneas jurisprudenciales por fallos recientes. Los servidores públicos tienen una herramienta para asegurar un resultado jurídico a través de la reiteración o fundamentación del precedente judicial.

Por lo que se da un nuevo rol al precedente judicial en Colombia, como lo reseña Hoyos Duque (2013), el cual lo observa como una instancia válida para proteger los derechos de las personas:

El recurso de unificación jurisprudencial introduce como única causal de dicho recurso el que “la providencia contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado” (art. 258), lo cual se traduce, ni más ni menos, en que se revive el recurso extraordinario de súplica (...). (p.470)

En ese sentido, el recurso extraordinario de extensión jurisprudencial se convierte en una herramienta digna para los servidores públicos ante el cambio jurisprudencial que puede provocar un juez o tribunal, pero más no eficaz, por su difícil acceso y demora en la resolución. Los anteriores aspectos torpean la eficiencia que se espera de cualquier acción legal, lo que afecta el derecho al mínimo vital de las personas que buscan proteger dicho derecho.

Necesidad de implementar una nueva figura jurídica para garantizar el derecho al mínimo vital en estos casos

Como se observó en los anteriores párrafos, el marco normativo erige distintas acciones para salvaguardar el mínimo vital de los servidores públicos, incluso ante la variación de las líneas jurisprudenciales. La acción de tutela, la extensión jurisprudencial y el recurso extraordinario de unificación permiten que el servidor público acuda en distintas etapas o instancias para salvaguardar su derecho; sin embargo, como se decantó, las acciones en su totalidad no resultan ser eficaces para la protección oportuna del derecho bajo estudio. La principal dificultad se presenta en el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, instrumento fidedigno para la protección del mínimo vital ante el cambio de jurisprudencia.

Respecto a la acción de tutela, se expuso de manera certera que es el medio más garantista y eficaz para la protección del mínimo vital cuando se evidencia una debilidad manifiesta, pero la fuerza que se proyecta en ciertos escenarios judiciales no es tan relevante ante el cambio de la línea jurisprudencial. Por eso, no tiene el peso suficiente para sentar unificación frente a determinado tema, en el presente caso, los derechos a la seguridad social.

Frente a la extensión jurisprudencial, el mecanismo es importante en sede administrativa, lo que otorga seguridad jurídica sin necesidad de acudir a un juez, prevaleciendo el precedente de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, lo anterior no obliga que la administración se comporte del modo como lo manda la jurisprudencia, siendo previsible que actúe contraria a ella, vulnerando los derechos al administrado, teniendo así, la necesidad de acudir a las instancias judiciales.

Si bien cada una de las acciones mencionadas presentan cierta dificultad para ser consagradas como mecanismos eficaces para la protección del mínimo vital, es el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial la acción menos eficiente en la

actualidad para salvaguardar el derecho, a pesar de que se concibe como la principal acción jurídica para evitar cambios bruscos de la jurisprudencia, a través de los jueces.

Sin embargo, se parte de la premisa que no es necesario incluir una nueva acción legal que refuerce los errores procesales o sustanciales para materializar el mínimo vital de los servidores públicos. Es suficiente que el Congreso de la República dote de aspectos más ágiles al recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, así, como de eliminar cargas procesales para que el mismo cumpla con la eficacia deseada.

Cuevas Cuevas (2013), haciendo referencia a la unificación de la jurisprudencia como recurso extraordinario, señaló que:

El Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia, es una herramienta importante y fundamental, tanto para las partes del proceso, por cuanto que con él buscarán igualdad de tratamiento en sede judicial, como también, para la misma jurisdicción en su órgano límite, ya que estarán en la obligación de administrar verdadera justicia, cuando deban hacer uso de la unificación jurisprudencial, haciendo notar los errores del fallador con su rebeldía o desconocimiento. (p.449)

Con base en lo anterior, el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial necesita dejar de ser exegético, sin distorsionar su excepcionalidad, pero haciendo más posible su instauración para las personas, abriendo su ámbito de aplicación no solo en materia contenciosa administrativa, sino en la jurisdicción ordinaria laboral. Así las cosas, la unificación jurisprudencial como recurso tendría un efecto rotundo sobre las decisiones judiciales que varíen la línea jurisprudencial, permitiendo tener consistencia en derecho, y logrando salvaguardar derechos fundamentales tan importantes como el mínimo vital.

Por tanto, la herramienta judicial ya está creada, la misma es idónea para salvaguardar el mínimo vital de los servidores públicos ante el cambio jurisprudencial

que puede provocar un juzgador en primera o segunda instancia; queda faltando es integrar el recurso en las distintas jurisdicciones que compone el sistema judicial, así como de integrar en sus características rituales menos dispendiosos para su práctica.

Por lo demás, el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial tiene los elementos necesarios para convertirse en un instrumento legal que respete las líneas jurisprudenciales, imponiendo el orden judicial de manera vertical u horizontal. Este garantiza que los servidores públicos puedan ostentar de un mínimo vital de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, eliminando de tal forma cualquier variación judicial que contradiga la línea sentada por estas corporaciones. La cuales se analizaron con anterioridad, y se concluyó que son lo suficientemente garantistas para salvaguardar el derecho al mínimo vital.

El mismo recurso se erige como un importante referente conforme a derechos de la seguridad social, pues muchos de ellos son vulnerados a través de actos administrativos, aspecto que posibilita la competencia de la contenciosa administrativa para dirimir dichos conflictos por medio de los recursos dispuestos por la Ley 1437 de 2011.

En consecuencia, la adquisición de un derecho social implica una modificación relevante para el Estado Social de Derecho respecto a la persona que recibe el derecho, por eso, como lo sostiene Márquez & Rico (2014) “La adquisición de un determinado derecho implica siempre que en cabeza de un titular se cumplan ciertas condiciones, lo que se acarrea como consecuencia jurídica que en su patrimonio se configure una situación jurídica” (p.137).

Adquisición que se debe respetar mediante la jurisprudencia, guardando coherencia y plenitud jurídica por el caminar del recurso extraordinario de unificación jurisprudencial que garantiza las decisiones uniformes, eliminando la variación jurisprudencial y la desprotección de los servidores públicos.

CONCLUSIONES

En la actualidad el mínimo vital es un derecho fundamental de toda persona, siempre que se encuentre en debilidad manifiesta. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado viene dando un tratamiento progresista frente a este derecho, permitiendo de tal manera, salvaguardar a las personas de inconsistencias económicas o de salud que afecten su dignidad humana y la vida. Por tal razón, el concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser considerado desde un punto de vista desde de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo. Por tanto, el mismo es una garantía para los servidores públicos.

La acción de tutela, la extensión jurisprudencial y el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial son los instrumentos constitucionales y legales más fidedignos para salvaguardar el mínimo vital de los servidores públicos. En ese sentido, el marco jurídico ofrece distintas alternativas para que el derecho sea protegido tanto en instancias judiciales como administrativa. En ese orden, la suficiencia legal y constitucional es idónea para que el mínimo vital se integre de manera adecuada a los servidores públicos.

El recurso extraordinario de unificación jurisprudencial es el mecanismo legal más idóneo para salvaguardar el mínimo vital de los servidores públicos ante la variación de las líneas jurisprudenciales de fallos judiciales de primera y segunda instancia.

En ese sentido, el recurso extraordinario de extensión jurisprudencial se convierte en una herramienta digna para los servidores públicos ante el cambio jurisprudencial que puede provocar un juez o tribunal, pero más no eficaz, por su difícil acceso y demora en la resolución. Los anteriores aspectos torpean la eficiencia que se espera de cualquier acción legal, lo que afecta el derecho al mínimo vital de las personas que buscan proteger dicho derecho.

Por tanto, la herramienta judicial ya está creada, la misma es idónea para salvaguardar el mínimo vital de los servidores públicos ante el cambio jurisprudencial que puede provocar un juzgador en primera o segunda instancia; queda faltando es integrar el recurso en las distintas jurisdicciones que compone el sistema judicial, así como de integrar en sus características rituales menos dispendiosos para su práctica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia Nacional de Defensa Jurídica (2014). Extensión de jurisprudencia en vía administrativa. Bogotá, D.C., Colombia. Obtenido en: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/ekogui_pereira/Documents/7.Presentacion_Of_Asesora_Juridica_ANDJE.pdf
- Arango, R. y Lemaitre, J. (2003). Jurisprudencia constitucional sobre el derecho al mínimo vital: estudio de caso: despido injusto de mujer embarazada. CIJUS, Universidad de los Andes, Bogotá, D.C.
- Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de Colombia de 1991*. Bogotá: Legis Editores S.A., Vigésima Séptima Edición, 2012.
- Bastida Freijedo, F; Villaverde Menéndez, I & Requejo Rodríguez, P (s.f.) (et.Al). Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978. 179-195. Obtenido en: <https://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/alaez/pdf/eficacia.pdf>
- Contreras Álvarez, D & Álvarez Márquez, S (et. Al) (2016). Nuevas cargas procesales para las entidades públicas en el proceso contencioso administrativo a la luz de la Ley 1437 de 2011. *Revista Hipótesis Libre*, 15, 164-185. Obtenido en: <http://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/hipotesis/article/view/172/164>
- Cuevas Cuevas, J (2013). La unificación de la jurisprudencia como recurso extraordinario. Bogotá, D.C., Colombia: Obtenido en: <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/17euripides-de-jesus-cuevas.pdf>

Franco, J. F. (2012). Aplicación del régimen de transición de la Ley 100: ¿interpretación o creación? *Ámbito Jurídico*. Obtenido en: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis-jurisprudencial/laboral-y-seguridad-social/aplicacion-del-regimen-de-transicion>

Hoyos Duque, R (2013). El valor del precedente judicial en la Ley 1437 de 2011: ¿es la jurisprudencia fuente de derecho? *Revista Vniversitas*, 14, 453-474. Bogotá, D.C., Colombia. Obtenido en: <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/18ricardohoyos-duque.pdf>

Ley 1437. (18 de enero de 2011). Congreso de la República. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá, D.C., Colombia: Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011. Obtenido en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/Ley_1437_2011.html#PART E%20PRIMERA

Ley 100. (Diciembre 23 de 1993). Congreso de la República. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral. Bogotá, Colombia. Diario Oficial 41.148 del 23 de diciembre de 1993. Obtenido en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/Ley_0100_1993.html

Ley 797. (Enero 29 de 2003). Congreso de la República. Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Bogotá, Colombia. Diario Oficial No. 45.079 de 29 de enero de 2003. Obtenido en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/Ley_0797_2003.html

Ley 33. (Enero 29 de 1985). Congreso de la República. Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público. Bogotá, Colombia. Diario Oficial No. 36856 del 13 de febrero de 1985. Obtenido en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=248>

Ley 71. (Diciembre 19 de 1988). Congreso de la República. Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Colombia. Diario Oficial No. 38.624 de 22 de diciembre de 1988. Obtenido en: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/Ley_0071_1988.htm

Ley 62. (Septiembre 16 de 1985). Congreso de la República. Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985. Bogotá, Colombia. Diario Oficial 37154 de septiembre 19 de 1985. Obtenido en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=14148>

Márquez, J & Rico, C (2014). La transición como derecho adquirido en el régimen de pensión después de 2014. *Revista Hipótesis Libre*, 9, 131-147. Obtenido en: <http://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/hipotesis/article/view/139/131>

Sentencia C-258. (7 de mayo de 2013). Corte Constitucional. Sala Plena. *M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub*. Bogotá, D.C., Colombia: Referencia: Expedientes D-9173 y D-9183. Obtenido en: www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-258-13.htm

Sentencia T-143. (20 de abril de 1998). Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. *M.P. Alejandro Martínez Caballero*. Bogotá, D.C., Colombia: Referencia: Expediente T-145.474. Obtenido en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-143-98.htm>

Sentencia T-297. (16 de junio de 1998) Corte Constitucional. Sala Séptima. *M.P. Alejandro Martínez Caballero*. Bogotá, D.C., Colombia: Referencia: Expediente T-152011. Obtenido en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-297-98.htm>

Sentencia T-140. (4 de marzo de 1999). Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. *M.P. Alfredo Beltrán Sierra*. Bogotá, D.C., Colombia: Referencia: Expediente T-186.611. Obtenido en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-140-99.htm>

Sentencia T-658 (1 de julio de 2008). Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. *M.P. Humberto Antonio Sierra Porto*. Bogotá, D.C., Colombia: Referencia: expedientes T-1.852.626 y T-1.911.331. Obtenido en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-658-08.htm>

Sentencia T-005 (16 de enero de 1995). Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. *M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz*. Bogotá, D.C., Colombia: Ref: Expediente T-42711. Obtenido en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-005-95.htm>

Vásquez Fruto, R. & Muñoz Osorio, A. (2010). El derecho a la pensión como derecho fundamental. *Revista Pensamiento Americano ISSN: 2027-2448 No.4. Enero – Junio 2010*.